



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

Bogotá, D.C., julio 6 de 2016 **7 6 JUL 2016**
11103600000 NR 226822 Cítese al contestar
Oficio No. 1081

SALIDA Nro.: 107924 Fecha: 06-07-2016
JORGE IVAN PALACIO PALACIO :HONORABLE MAGISTRADO
CORTE CONSTITUCIONAL
CALLE 12 NO.7-65 PALACIO DE JUSTICIA
BOGOTA D.C. (BOGOTA)

SALIDA Nro.: 107924 Fecha: 06-07-2016
JORGE IVAN PALACIO PALACIO :HONORABLE MAGISTRADO
CORTE CONSTITUCIONAL
CALLE 12 NO.7-65 PALACIO DE JUSTICIA
BOGOTA D.C. (BOGOTA)

Informe de seguimiento a lo ordenado en la sentencia T-488 de 2014

Doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado H. Corte Constitucional
E.S.D.



Cordial saludo:

En cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional mediante sentencia T- 488 del 2014 y al auto 222 del 2016 procede la Procuraduría General de la Nación a rendir el respectivo informe en los siguientes términos. En primer lugar considera la Procuraduría General de la Nación que es necesario realizar un recuento del contexto y de los antecedentes que caracteriza la crisis actual que afecta a la institucionalidad agraria, y que ha impedido el cumplimiento de las órdenes de la H. Corte Constitucional en materia de la implementación y ejecución del Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales en adelante PNCRTR:

Antecedentes

Mediante el Decreto 1300 de 2003, se creó el INCODER, el cual absorbió funciones de las siguientes entidades: INCORA, Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), INPA y el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). El aludido decreto estableció que el INCODER tendría como función principal *"ejecutar la política de desarrollo rural"* en el país, tarea que difícilmente podría cumplirse al concentrar en una entidad débil las funciones de las entidades suprimidas, con el agravante de la corrupción imperante en una entidad cooptada por el paramilitarismo en muchas regiones del país, heredera de los vicios del antiguo INCORA, cuyo desmonte facilitaría el despojo de tierras por vía administrativa, entre otras por la pérdida de archivos y documentación oficial.

La nueva institución (INCODER) nació entonces sobrecargada de funciones, sin personal suficiente y muchos de sus funcionarios delinquieron asociados con el paramilitarismo hasta el 2010 para consolidar el proceso de usurpación de tierras mediante la legalización de despojo de estas a particulares, como la apropiación de baldíos de la Nación. El decreto 1300 de 2003, estableció que el INCODER, conformaría nueve oficinas de enlace territorial para el ejercicio de sus funciones del orden territorial, esquema que no funcionó y se quiere replicar en la ANT.

El INCORA heredó al INCODER en el 2003 aproximadamente 50.000 expedientes de titulación de baldíos, extinción de derecho de dominio, clarificación y deslinde de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados los cuales permanecieron por más de dos años engavetados hasta que la Procuraduría



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios exigió el INCODER la realización de un Plan de Choque que culminó en el 2008.

En el 2007, cuando el despojo de tierras y el desplazamiento forzado alcanzaron un nuevo pico (339.773 desplazados), y se registró la cifra más alta de desplazamiento étnico: 45.630 personas pertenecientes a comunidades afrocolombianas), se aprobó la Ley 1152, "Por la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el INCODER, y se dictaron otras disposiciones". Esta norma dispuso la creación de La Unidad Nacional de Tierras Rurales -UNAT-, entidad que asumió la competencia de continuar desarrollando las funciones relacionadas con la ejecución y trámite de los diferentes procesos agrarios que conocía el INCODER, tales como los procedimientos de clarificación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad.

La UNAT fue incapaz de cumplir con su objeto, el de ser instrumento de planificación, administración y disposición de los predios rurales de propiedad de la nación, con el propósito de lograr su apropiada utilización de acuerdo con la vocación y los fines correspondientes. A la UNAT le fue asignado el conocimiento de los procesos agrarios que venía atendiendo el INCODER, con el fin de que los culminara en el término de dos años. Durante su corta existencia los procesos agrarios se paralizaron. La liquidación de la UNAT terminó el 30 de septiembre de 2009.

Con el Decreto 4902 de 2007 se modificó la estructura del INCODER para cumplir las orientaciones de la Ley 1152 de 2007, adelantando una reforma que buscó ampliar la cobertura regional al pasar de las 9 oficinas de enlace territorial (OET) a 32 oficinas departamentales. Sin embargo, esta estructura descentralizada no fue reforzada, ya que la mayoría de las oficinas territoriales no contaban con suficientes abogados de planta y técnicos como topógrafos, situación que se mantuvo durante toda la existencia de INCODER.

En vigencia de la Ley 1152 del 2007 se creó la UNAT, la Ley 1152 del 2007 fue declarada inexecutable mediante sentencia C-175 de 2009, situación que revivió de manera inmediata la Ley 160 de 1994.

Mediante el Decreto 3759 del 30 de septiembre de 2009 se aprobó la modificación de la estructura interna del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER- y se dictaron otras disposiciones, en su artículo 4° numeral 18, señaló dentro de las funciones del INCODER la de: "*Adelantar los procedimientos agrarios de clarificación, extinción} recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde y reversión*".

Mediante Resolución No 2140 del 21 de octubre de 2009, se delegó en los Directores Territoriales y en la Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER la ejecución de los procedimientos agrarios de extinción del derecho de dominio, restitución de baldíos indebidamente ocupados, clarificación, deslinde y restitución de playones y madre selvas desecadas, en su artículo primero delegó en los Directores Territoriales dictar providencias mediante las cuales se inicien los procedimientos de extinción de dominio, *clarificación de la propiedad*, deslinde o delimitación de las tierras que fueren del dominio de la Nación, regulación del uso de terrenos comunales (sabanos y playones comunales), recuperación de baldíos



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
indebidamente ocupados y tramitar los procedimientos administrativos respectivos, con observancia de lo previsto en el Capítulo X de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1465 del 2013 en cuanto a los procedimientos mencionados.

Como lo determinó la Procuraduría General de la Nación los procesos agrarios fueron una de las áreas con menor gestión del INCODER, debido al escaso personal y presupuesto para llevar a cabo esa misión.

Los procesos agrarios más complejos y con mayores dificultades para sustanciar son los de deslinde y recuperación de baldíos por cuanto las territoriales necesitan la aprobación de recursos por parte del nivel central. En ocasiones, los predios son de gran extensión. Durante el año 2014 se realizaron 607 actos administrativos relacionados con procesos agrarios que permitieron la intervención de 558.416 hectáreas. Teniendo en cuenta que para octubre de 2014 la Dirección Técnica de Procesos Agrarios reportó que se estaban tramitando 2.902 expedientes de procesos agrarios a nivel nacional, con un área intervenida de aproximadamente 1.063.694 hectáreas, se observa una baja gestión, lo que se evidencia con exigua cifra de 18 resoluciones finales para un total de 73.165 hectáreas y 4 resoluciones de recursos contra resoluciones finales para un total de 1.455 hectáreas

El 22 de diciembre de 2014 INCODER suscribió el contrato 940, con Servicios Postales Nacionales 472, por valor de \$3.191 millones, cuyo objeto corresponde a: Realizar y actualizar el inventario técnico y organización documental integral que se encontraba físicamente ubicado en las 31 direcciones territoriales del INCODER para las series documentales establecidas en las tablas de retención documental, para la recopilación de información existente y verificación del estado actual del archivo en el tema de baldíos y procesos agrarios a nivel nacional.

En diciembre del 2015 INCODER informó que se encontraban en trámite 2.950 procesos agrarios a nivel nacional, dentro de los cuales se encontraban 1.352 procesos de clarificación de la propiedad y 576 de recuperación.

En los dos primeros meses del año 2015 se observó total inactividad en los procesos agrarios en INCODER, debido a la falta de personal tanto a nivel central como territorial, y no se realizaron visitas de topografía en conjunto con el IGAC por cuanto no se ha suscrito convenio interadministrativo.

En agosto y septiembre del 2015 todas las territoriales de INCODER suspendieron actividades para adelantar inventario previo a la remisión de expedientes hacia Bogotá.

En noviembre se dio la orden de remitir los expedientes desde las territoriales hacia el nivel central de INCODER y se les quitó las facultades a los directores territoriales.

El 7 de diciembre de 2015 mediante decreto 2365 se ordenó la liquidación de INCODER, y mediante el Decreto 2363 se creó la agencia Nacional de Tierras ANT.

El artículo 3 del decreto 2365 señaló que el INCODER en liquidación conservó su capacidad para seguir adelantando los procesos agrarios, de titulación de baldíos, de adecuación de tierras y riego, gestión y desarrollo productivo, promoción,



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
asuntos étnicos y ordenamiento productivo hasta tanto entrara operación la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, lo cual debió haber ocurrido en un término no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del referido decreto. El término anterior fue ampliado en un mes contado a partir del 7 de febrero de 2016

Ante la suspensión de los procesos misionales en materia de tierras que adelantaba INCODER y que fueron asignados a la ANT, el 9 de marzo de 2016 la Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de agricultura y desarrollo rural, alertando sobre la crisis de la institucionalidad rural, resaltando entre otros aspectos el retraso de la implementación de la sentencia T 488 de 2014, ante lo cual el ministro respondió que desde el momento de la expedición de los respectivos actos administrativos hasta el pleno funcionamiento de la respectiva entidad, este proceso toma en promedio (8) meses.

Sin embargo solo hasta la expedición del decreto 419 del 7 de marzo de 2016 el gobierno estableció la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras ANT. El 26 de mayo fue nombrado el director de la ANT, y un mes después tan solo se habían vinculado al secretario general y a 42 funcionarios de la planta de 85 aprobados, que corresponden a exfuncionarios de INCODER.

Posteriormente el 17 de junio del 2016 la ANT solicitó a la Procuraduría acompañamiento para el proceso de entrega. De acuerdo al director de la ANT esta está atravesando una fase de consolidación.

Si bien el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales fue presentado por el INCODER (en liquidación) el 12 de enero de 2016, es claro que la ANT es la entidad responsable de su implementación, pero, la nueva entidad a fecha del 26 de junio de 2016 ni siquiera no ha abierto sus puertas al público,.

Seguimiento a las ordenes emitidas en la Sentencia T-488 DEL 2016

Ya entrando en materia la Procuraduría General de la Nación respecto a las órdenes expedidas por la Honorable Corte Constitucional se permite señalar lo siguiente.

QUINTO.- ORDENAR al INCODER, adoptar en el curso de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, un plan real y concreto, en el cual puedan identificarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales habrá de desarrollarse un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la nación dispuestos a lo largo y ancho del país. Copia del anterior plan de trabajo se enviará a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, evalúen los cronogramas e indicadores de gestión mediante un informe que presentarán al juez de instancia, en el transcurso del mes siguiente a la recepción del plan. De igual manera, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y la Presidencia de la República recibirán copia del plan propuesto por el INCODER y de los comentarios y sugerencias que formulen los órganos de control. Una vez se acuerde y apruebe la versión definitiva del plan de trabajo, a más tardar dentro de los cinco meses




PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
siguientes a la notificación de esta providencia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República vigilarán su cumplimiento y desarrollo, e informarán periódicamente al juez de instancia y a la Corte Constitucional de los avances o correctivos que estimen necesarios.

Respecto a la orden quinta el INCODER en liquidación formuló el Plan Nacional de Clarificación y recuperación de tierras rurales, el cual se desarrolla en las siguientes etapas:

1. Recopilación y Análisis de información secundaria.
2. Diagnósticos, rutas jurídicas y definición de metodologías.
3. Ejecutar pilotos en las zonas definidas para Realización de Inventario, Clarificación y Recuperación de Baldíos.
4. Administración de Tierras de la Nación.

El Plan contempla la implementación de un Plan Piloto, que incluye adelantar los procesos agrarios de clarificación mediante el método de barrido predial, que conlleva análisis jurídico, catastral, agrológico

Se propone en el PNCRTR la contratación de personal calificado, de in grupo de trabajo interdisciplinario, habida cuenta del número reducido de la  gerencia de Tierras Rurales del INCODER. Se señala que la ejecución del Plan Piloto no debe afectar el cumplimiento normal de las actividades de la institución, sin embargo considera la Procuraduría General de la Nación que tanto el PNCRTR como el Plan Piloto hacen parte de la misión del entonces INCODER y de la actual ANT.

Uno de los vicios detectados en el extinto INCODER era la existencia de plantas de contratistas externos que adelantaban las funciones misionales, ocasionando situaciones de la existencia de contrato realidad, o de contratistas con varios contratos sin dedicación exclusiva y poca productividad altamente remunerados, frente a los salarios de funcionarios de planta, Los contratistas muchas veces no reunían el perfil requerido por falta de estudios y experiencia, acarreando múltiples fallas en los trámites de los expedientes, hecho que genera demoras.


Estas contrataciones irregulares e ilegales obedecían muchas veces al pago de favores políticos que evidenciaban situaciones de tráfico de influencias y corrupción. (En el análisis realizado en diciembre de 2015 por la Procuraduría General de la Nación de los perfiles de los contratistas vinculados a INCODER para atender los procesos agrarios se encontró la vinculación como contratistas de dos licenciadas una en preescolar y la otra en educación básica, situación que muestra el folclorismo con el que se realizaban las vinculaciones de contratistas en INCODER)

La centralización de funciones en INCODER y la contratación de profesionales desde Bogotá, como los topógrafos, dilataban los procesos y demoraban la toma de decisiones administrativas.


Situación similar se puede dar amparado en la excusa de las órdenes de la Corte Constitucional donde se justifica la contratación de personal para la ejecución del PNCRTR.



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

Si bien el Plan de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación el 23 de diciembre de 2015, ante la supresión de INCODER resultaba improcedente e ineficaz hacer la evaluación de un documento que tendría que ser validado por la entidad que lo reemplazaría, es decir la ANT, ya que la implementación del Plan y el cumplimiento de sus metas depende de la capacidad de la nueva institución, que hasta la fecha no ha entrado a funcionar, ya que INCODER en liquidación  ha culminado el empalme, y toda la documentación se encuentra archivada.

Así bien, no se puede considerar que el Plan de recuperación elaborado por la USAID e INCODER pensado para ser implementado por una entidad hoy suprimida, pueda ser ejecutado por la ANT que se muestra como un organismo que ha nacido debilitado, sin gran capacidad operativa. La evaluación de los cronogramas e indicadores de gestión del Plan de recuperación debe realizarse con base en la capacidad de la UNAT de ejecutar el Plan, el cual no ha sido aprobado en su versión definitiva, ya que la entidad responsable no ha empezado a funcionar.

Por las razones anotadas la Procuraduría se abstuvo de rendir los informes contemplados en la orden quinta de la T-488, a la espera de que la nueva institucionalidad asumiera sus funciones, pero ante la falta de celeridad de este proceso y dada la conculcación de derechos fundamentales ante la omisión de las autoridades de la institucionalidad pública agraria, falta de celeridad  incluso negligencia que conlleva la parálisis de los procedimientos agrícolas que adelantaba INCODER, se advierte a la H. Corte Constitucional sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sector agrario que se evidencia por la parálisis que afecta a la institucionalidad pública agraria ante el incumplimiento de los objetivos constitucionales y legales de garantía de derechos a la población rural.

En cuanto a la orden octava de la T-488 del 2014 que señala :

OCTAVO.- ORDENAR al INCODER que adelante, con fundamento en el informe presentado en el numeral anterior, los procedimientos de recuperación de baldíos a los que haya lugar. Dentro de los cinco (5) meses siguientes a la recepción del precitado documento, el INCODER deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República los avances en esta orden, especificando, por lo menos, el (i) número de procesos iniciados, (ii) fase en la que se encuentran y (iii) cronograma de actuaciones a ejecutar. Copia de este informe se enviará a la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.

La orden octava se refiere exclusivamente a los baldíos que hayan sido adjudicados vía sentencia de pertenencia. Sin embargo como se ha señalado la institucionalidad agraria se encuentra paralizada. No se ha adelantado ningún procedimiento de recuperación de baldíos los cuales se encuentran suspendidos desde noviembre del 2015 cuando el nivel central de INCODER le quitó facultades a los directores territoriales y dio la orden de remitir los expedientes al nivel central, donde se encuentran archivados en cajas con grave riesgo de que se



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

repita las situaciones que se dieron cuando desapareció en INCORA en el 2003, y con la entrada en vigencia de la Ley 1152 del 2007 y su posterior declaratoria de inexequibilidad, momentos en los cuales se presentaron pérdidas de expedientes.

Como resultado de la parálisis de la institucionalidad del sector agrario ni INCODER en liquidación, y mucho menos la ANT han remitido un informe sobre actuaciones relacionadas con recuperación de baldíos salvo el reporte de 10 casos en los cuales se han interpuesto tutelas contra las sentencias de pertenencia.

INCODER señala que avanzó con la colaboración de la UPRA en el cruce de información, llegando a la conclusión de que existen dos variables importantes en los precitados informes, falsas tradiciones y/o folios con declaraciones de mejoras, cruces que pretenden establecer si de acuerdo a las bases de datos existentes en el INCODER, existen procedimientos agrarios en curso y que se encuentren adjudicados por declaración de pertenencia por vía ordinaria.

De acuerdo a INCODER el resultado arrojó un total de 10 procedimientos agrarios en curso y que tenían una sentencia de declaración de pertenencia., frente a los cuales iniciaron las acciones de tutela respectivas contra las sentencias por la cuales se declaran por pertenencia, predios que posiblemente pudiesen ser de carácter baldío, toda vez que no demuestran un título originario del Estado que no haya perdido su eficacia legal o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, y se propuso como plan piloto para el desarrollo de esta actividad, el departamento de Casanare, por presentar grandes extensiones de terreno a personas particulares por 18 procesos de pertenencia sobre predios que tienen la precariedad registral requerida por la Ley 160 de 1994.

Pero si bien se detectaron 10 procedimientos agrarios con sentencia de pertenencia, frente a los cuales se interpusieron tutelas no se ha realizado ninguna actividad para la recuperación de los 26.929 predios presuntamente baldíos, identificados por la Superintendencia de Notariado y Registro que corresponden a un área de 1.202.366.16 hectáreas, adjudicados por sentencias de pertenencia.

El INCODER señaló que a partir de la expedición de la Sentencia T-488 de 2014 por la Corte Constitucional, el Instituto venía siendo vinculado en los procesos de pertenencia en virtud de los cuales los particulares pretenden la titulación de bienes por prescripción adquisitiva de dominio, en muchos de los casos se presentan frete a predios baldíos para adelantar la defensa de tales bienes que son del Estado.

Frente a las sentencias desfavorables proferidas por los despachos judiciales en procesos de pertenencia se instauraron acciones de tutela, por vías de hecho, obteniendo en algunos casos la revocatoria del fallo de pertenencia y recuperando para el estado la titularidad de los bienes baldíos. Sin embargo, a partir de la sentencias TC1776-2016 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con radicado 15001-22-13-000-2015-00413-01, los



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
despachos judiciales han venido emitiendo fallos desfavorables, soportados en los argumentos allí esgrimidos, en los que se hace una interpretación errada de los alcances del fallo proferido por la Corte Constitucional (sentencia T- 488), (INCODER en Liquidación , Informe de liquidación fecha de corte 7 de mayo del 2016).

Ante esta situación es necesario que la H Corte Constitucional aclare a los jueces de la República el alcance de la T-488 en fallos de revisión que se pronuncien sobre las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que se aparta abiertamente de la sentencia referida y recogen la vetusta tesis de la plena vigencia del artículo 1 de la Ley 200 de 1936 que señala que :

“Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica.”

Finalmente se presenta el informe sobre las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la orden décima de la citada T-488 que estableció:

“DECIMA Ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República hacer seguimiento, dentro de sus competencias constitucionales y legales, a las órdenes anteriores así como evaluar su cumplimiento y desarrollo.(...)”

Al respecto cabe señalar que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios expidió el memorando 002 de enero del 2015 dirigido a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios de todo el país, en cuyo cumplimiento se han realizado las siguientes acciones, dentro del seguimiento efectuado a las sentencias proferidas por los Juzgados Civiles del Circuito, en procesos de pertenencia contra personas indeterminadas:

1. Se ha requerido a los jueces del Circuito de la República para que tengan presente en los procesos de declaración de pertenencia lo señalado por la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-488 de 2014.
2. Se ha realizado la interposición de recursos de reposición solicitando la vinculación de INCODER al proceso como litisconsorcio necesario, peticiones que han sido acogidas por los jueces de manera inmediata.
3. Se ha realizado la interposición de recursos de apelación por fallos notificados en primera instancia en procesos de pertenencia contra personas indeterminadas.
4. Se encontró igualmente que muchos juzgados civiles del circuito no están notificando las sentencias lo que ha impedido la intervención del Ministerio Público en segunda instancia ante los Tribunales Superiores, por lo que se ha solicitado la notificación de primera instancia.
5. Se han sustentado recursos de apelación de sentencias favorables a demandantes contra indeterminados.



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

6. Se ha intervenido como Ministerio Público conceptuado en acciones de tutela por falta de vinculación al proceso del INCODER.
7. Se ha requerido a las Oficinas de Instrumentos Públicos con el fin de solicitar las suspensiones del registro solicitudes que han sido acatadas por esa entidad.

Conclusiones

La ANT no ha iniciado funciones lo que tiene paralizados todos los procesos misionales incluyendo la ejecución del Plan nacional de clarificación y recuperación de tierras rurales.

La ANT tampoco se ha pronunciado sobre el referido Plan de clarificación y recuperación de tierras agrarias el cual fue elaborado por una entidad que fue suprimida, y que no ha hecho empalme con la nueva entidad, por tal motivo es improcedente evaluar el documento que plantea metas a largo plazo de 11 años.

La Superintendencia de Notariado y registro dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, es así como se depuró la información solicitada a las 193 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y se obtuvo como resultado un total de 65.445 folios de matrícula inmobiliaria de los cuales 48.605 son rurales. La Superintendencia determinó que los Jueces de la República han adjudicado a través de sentencias de pertenencia 26.929 predios presuntamente baldíos, que corresponden a un área de 1.202.366.16 hectáreas

Sin embargo a la fecha no se cuenta con un inventario de baldíos, el cual depende de la implementación del catastro multipropósito actualizado, ordenado por la Ley 1753 del 9 de junio del 2015 Plan de Desarrollo Nacional

Artículo 104. Catastro multipropósito. Se promoverá la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el apoyo de los catastros descentralizados, podrá realizar las actividades necesarias para la formación y actualización catastral de manera gradual e integral, con fines adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, logrando plena coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por barrido y predial masivo, en los municipios y/o zonas priorizadas con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme con la metodología definida para el efecto.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará la implementación de un Sistema Nacional de Gestión de Tierras (SNGT), cuya base la constituirá la información del catastro multipropósito, del registro público de la propiedad y del ordenamiento territorial.



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

La recuperación 26.929 predios que corresponden a un área de 02.366.16 hectáreas identificados como presuntos baldíos adjudicada mediante sentencias de pertenencia supone una tarea imposible de cumplir por parte de la débil institucionalidad agraria existente.

Como ejemplo de la incapacidad de la institucionalidad agraria para administrar los bienes baldíos se trae a colación el caso del predio El Porvenir, cuya área hace parte de las más de un millón de hectáreas que patrocinador de grupos paramilitares Víctor Carranza, acumuló, producto tanto del despojo a víctimas del conflicto como de apropiación ilegal de baldíos de la nación.

El predio El porvenir situado en Puerto Gaitán que comprende 27.000 hectáreas que en 1992 fueron adjudicadas por INCORA mediante 27 títulos de manera irregular y fueron revocadas en 2014. Actualmente el predio que recobró la naturaleza de baldío, y como tal debe ser administrado por la ANT si bien fue entregado formalmente por los familiares del señor Víctor Carranza la mayor parte se encuentra ocupado por sus empleados que adelantan actividades de agroindustria y ganadería a gran escala, y otra parte se encuentra afectada por una ocupación desordenada de población desplazada, indígenas y avivatos que quieren aprovecharse del caos institucional que afecta al sector agrario.

Este caso muestra como la carencia de funciones policivas por parte de la autoridad de tierras, hace que su ejercicio misional se quede en el papel, como convidado de piedra y rey de burlas frente a la apropiación ilegal de los baldíos propiedad de la Nación.

El PNCRTR no se ajusta a la realidad de la nueva institucionalidad. Está proyectado para una entidad que fue suprimida y reemplazada en cuanto a las funciones específicas de baldíos a una entidad que no ha entrado a funcionar, ni siquiera se han asumido las funciones de representación judicial en procesos de pertenencia que actualmente cursan en el país.

Se requiere igualmente la unificación de la jurisprudencia en materia de baldíos. Todas las tutelas interpuesta por INCODER se cayeron al acoger los jueces la sentencia de la CSJ. Dos situaciones impiden la implementación: La inexistencia material de una entidad que asuma la implementación del PNCRTR, y la oposición de los jueces que adelantan procesos de pertenencia desconociendo abiertamente la T 488 apoyándose en la sentencia de la CSJ.

La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su preocupación sobre las posibilidades reales que la ANT tiene para asumir la gran responsabilidad no solamente del manejo del PNCRTR como máxima autoridad de tierras habida cuenta que la planta de personal creada parece insuficiente 85 profesionales bajo las denominaciones de gestores y analistas. Es de anotar que INCODER contaba con un equipo de funcionarios de planta y 46 contratistas en nivel central dedicados al trámite de procesos agrarios incluyendo titulación de baldíos.

Con el diseño previsto para la estructura de la ANT se corre el riesgo de repetir la situación que se vivió con el antiguo INCODER y las Oficinas de Enlace Territorial



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
en su momento que fueron incapaces de gestionar los procesos agrarios a su cargo.

Como lo señala la Corte Constitucional en el auto 222 no es posible adelantar ejercicios de evaluación idoneidad y pertinencia del plazo estipulado de 11 años si no se cuenta con información sobre costos, formas de financiación, tiempo, personal, tecnología, responsables y esfuerzos institucionales.

Cordialmente,

OSCAR DARIO AMAYA NAVAS
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios

CC Presidencia de la República
Ministerio de Agricultura
Agencia Nacional de Tierras